

3, y 1.256 del Código Civil; 205 del Código de Comercio; 5, párrafo 3, de la Ley del Mercado Hipotecario, y 29 de su Reglamento, la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 30 de noviembre de 1994 y las Resoluciones de 24 de abril de 1992, 8 de noviembre de 1993, 23 de octubre de 1987, 16 de marzo de 1990, 4 de julio de 1984, 26 de octubre de 1984, 26 de diciembre de 1990 y 17 de marzo de 1994.

1. El primero de los defectos que se objeto de impugnación, plantea la cuestión de si queda debidamente satisfecho el principio de especialidad cuando estipulándose la variabilidad de los intereses remuneratorios, la cláusula de constitución de la hipoteca se limita a expresar que la misma «garantiza el pago de intereses (remuneratorios) por un máximo en perjuicio de terceros conforme al artículo 114 de la Ley Hipotecaria, de 105.000.000 de pesetas».

2. La respuesta negativa es indudable. Como ya señalara este centro directivo, la garantía hipotecaria de los intereses remuneratorios cuando son variables pertenece al grupo de la hipoteca de seguridad, lo que exige la fijación de un tipo máximo a la cobertura hipotecaria de dichos intereses, tope que, en cuanto especificación delimitadora del contenido del derecho real, opera a todos los efectos legales, favorables o adversos, y tanto en las relaciones entre el acreedor hipotecario y el deudor hipotecante como en las que se producen entre aquél y el tercer poseedor o los titulares de derechos reales o cargas posteriores sobre la finca gravada, adquiridos a título oneroso o gratuito. Esta exigencia no puede, pues, entenderse satisfecha con la fijación de un máximo de responsabilidad que claramente se concreta a las relaciones con terceros, dejando indeterminada la extensión de la cobertura hipotecaria de los intereses remuneratorios entre el acreedor y el deudor hipotecante o quien se subroga en su doble posición jurídica de deudor y propietario del bien gravado, y es que el máximo ahora cuestionado en realidad está dirigido a operar, no en el plano de la definición del derecho real de hipoteca a todos sus efectos, sino en el de la fijación, en virtud de la previsión contenida en el artículo 114 de la Ley Hipotecaria, y dentro del margen que este precepto concede a la autonomía de la voluntad, del número de anualidades por intereses que pueden ser reclamados con cargo al bien hipotecado en perjuicio de terceros.

3. En cuanto a la estipulación 5.^a, c), que establece la previsión del vencimiento anticipado del préstamo «cuando por cualquier circunstancia sufriera deterioro o merma el bien hipotecado que disminuya su valor en más de un 20 por 100 y la parte prestataria no ampliase la hipoteca a otros bienes suficientes para cubrir la relación exigible entre el valor del bien y el crédito que garantiza o, en su caso, practicado el requerimiento a que se refiere el artículo 29 del Real Decreto 685/1982, sobre regulación del mercado hipotecario, no devolviese la parte del préstamo que exceda del importe resultante de aplicar a la tasación actual el porcentaje utilizado para determinar inicialmente la cuantía del mismo», se ha de reiterar el criterio de este centro en el sentido de que un pacto de este tipo se limita a dar concreción a una de las facultades que integran el crédito hipotecario conforme al artículo 1.129, número 3, del Código Civil y 5 de la Ley de Mercado Hipotecario, sin que, de la sola referencia que se contiene en la transcrita estipulación al requerimiento mencionado en el artículo 29 del Real Decreto 685/1982, pueda extraerse la conclusión de un quebrantamiento de la imparcialidad y objetividad con que dicha tasación ha de ser efectuada como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 1.256 del Código Civil y puesto que se trata de una tasación que se efectúa vigente ya el contrato de hipoteca (Resoluciones de este centro de 4 de julio de 1984 y 23 de octubre de 1987), que, en principio, obligaría a cumplir lo dispuesto en la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 30 de noviembre de 1994, sobre tasaciones de inmuebles ofrecidos en garantías afectas al mercado hipotecario secundario.

Por todo ello, esta Dirección General ha acordado desestimar las apelaciones interpuestas, confirmando el Auto presidencial apelado, en cuanto confirma la nota de calificación respecto del primer defecto examinado y lo revoca respecto del segundo.

Madrid, 12 de julio de 1996.—El Director general, Luis María Cabello de los Cobos y Mancha.

Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

18534 *RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 1996, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se hace pública la retirada de la condición de entidad gestora con capacidad restringida del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a la entidad «Intermediarios Financieros, Agencia de Valores y Bolsa, Sociedad Anónima», por renuncia de la citada entidad.*

La entidad «Intermediarios Financieros, Agencia de Valores y Bolsa, Sociedad Anónima», ha solicitado la retirada de la condición de entidad gestora con capacidad restringida del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones.

Dado que, conforme al Real Decreto 1009/1991, de 21 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 505/1987, de 3 de abril, en materia de adquisición y pérdida de la condición de miembro del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones, el acceso a la condición de entidad gestora es voluntario, no existiendo norma alguna que permita considerar que no tiene el mismo carácter el mantenimiento de dicha condición, en virtud de lo anterior, habiéndose recibido informes favorables del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y de acuerdo con la delegación conferida en el apartado a) de la disposición adicional segunda de la Orden de 19 de mayo de 1987 en su redacción dada por el artículo 8.º de la Orden de 31 de octubre de 1991, he resuelto retirar a «Intermediarios Financieros, agencia de Valores y Bolsa, Sociedad Anónima», a petición de la propia entidad, la condición de entidad gestora del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones con capacidad restringida, declarando de aplicación a la misma lo dispuesto en el artículo 21.3 de la Orden de 19 de mayo de 1987, en su nueva redacción dada por la Orden de 31 de octubre de 1991.

La presente Resolución, contra la que puede presentarse recurso ordinario en el plazo de un mes ante esta misma Dirección General o ante la Secretaría de Estado de Economía, será publicada en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 1 de agosto de 1996.—El Director general, Jaime Caruana Lacorte.

18535 *RESOLUCIÓN de 5 de agosto de 1996, del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público la combinación ganadora, el número complementario y el número del reintegro de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días 29, 30 y 31 de julio y 2 de agosto de 1996 y se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.*

En los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días 29, 30 y 31 de julio y 2 de agosto de 1996, se han obtenido los siguientes resultados:

Día 29 de julio de 1996:

Combinación ganadora: 46, 35, 32, 48, 17, 37.
Número complementario: 36.
Número del reintegro: 8.

Día 30 de julio de 1996:

Combinación ganadora: 30, 15, 16, 36, 28, 20.
Número complementario: 35.
Número del reintegro: 8.

Día 31 de julio de 1996:

Combinación ganadora: 4, 30, 12, 26, 21, 38.
Número complementario: 20.
Número del reintegro: 0.

Día 2 de agosto de 1996:

Combinación ganadora: 46, 20, 10, 33, 15, 13.
Número complementario: 14.
Número del reintegro: 1.

Los próximos sorteos, que tendrán carácter público, se celebrarán los días 12, 13, 14 y 16 de agosto de 1996, a las veintidós quince horas, en el Salón de sorteos del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, sito en la calle de Guzmán el Bueno, 137, de esta capital.

Madrid, 5 de agosto de 1996.—La Directora general, P. S., el Gerente de la Lotería Nacional, Manuel Trufero Rodríguez.

MINISTERIO DEL INTERIOR

18536 *ORDEN de 30 de julio de 1996 por la que se modifica parcialmente la de 18 de marzo de 1993, reguladora del procedimiento para la concesión de ayudas en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia, catástrofes y calamidades públicas.*

La Orden del Ministerio del Interior de 18 de marzo de 1993, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» del día 30 del mismo mes y año, por la que se regula el procedimiento para la concesión de ayudas en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia, catástrofes y calamidades públicas, entró en vigor con anterioridad a la publicación del Reglamento del procedimiento para la concesión de subvenciones públicas, aprobado por Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre.

La experiencia acumulada en la aplicación de la Orden citada, y la conveniencia de adaptar algunos de sus contenidos a la normativa general sobre procedimiento administrativo y más concretamente al mencionado Reglamento de subvenciones públicas, hace aconsejable su modificación parcial y puntual, en lo que concierne tanto a la ampliación del plazo para la resolución de solicitudes, con el fin de ajustarlo a lo que viene siendo el tiempo real de tramitación, como al señalamiento expreso de que las resoluciones recaídas en el procedimiento no ponen fin a la vía administrativa, y, finalmente, a la determinación de los efectos presuntos en caso de que no recayera resolución expresa en el plazo establecido para ello.

En su virtud, dispongo:

El apartado sexto de la Orden de 18 de marzo de 1993, por la que se regula el procedimiento para la concesión de ayudas en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia, catástrofes y calamidades públicas, queda redactado de la siguiente forma:

«1. La Dirección General de Protección Civil resolverá las solicitudes, de forma motivada, en el plazo máximo de seis meses desde la recepción de aquéllas en el registro del órgano administrativo competente, y notificará todas las resoluciones a los interesados, dándose conocimiento de dichas resoluciones a las Delegaciones del Gobierno o Gobiernos Civiles que hubieran tramitado las correspondientes solicitudes.

2. La resolución no pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse contra ella recurso administrativo ordinario, en la forma y plazo establecidos en el artículo 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. Transcurrido el plazo máximo para resolver el procedimiento sin que haya recaído resolución expresa, se podrá entender desestimada la solicitud, de acuerdo con lo previsto en el artículo 6.4 del Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para la concesión de subvenciones públicas.»

La presente disposición entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 30 de julio de 1996.

MAYOR OREJA

MINISTERIO DE FOMENTO

18537 *ORDEN de 29 de julio de 1996 por la que se aprueba el cuadro nacional de atribución de frecuencias.*

La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones, dispone en el número 1 de su artículo 7, que la gestión del dominio público radioeléctrico, su administración y control corresponde al Estado.

En ejecución de ello, el Reglamento de desarrollo de la citada Ley, en relación con el dominio público radioeléctrico y los servicios de valor añadido que utilicen dicho dominio, aprobado por el Real Decreto 844/1989, de 7 de julio, en su artículo 6.º establece que el Ministro de Fomento aprobará el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF), con el contenido que señala dicho precepto, a fin de lograr la ordenada utilización coordinada y eficaz del dominio público radioeléctrico.

La aprobación del Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias tuvo lugar por Orden del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones de 29 de diciembre de 1989, que fue modificada por las Órdenes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes de 11 de junio de 1991, de 18 de mayo de 1992, y de 18 de junio de 1993.

La evolución tecnológica en materia de radiocomunicaciones en los últimos años y las decisiones y recomendaciones de los diversos organismos internacionales competentes de los que España forma parte hacen necesaria una nueva modificación del Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF). No obstante, la amplitud de las modificaciones a introducir, que afectan a la práctica totalidad del cuadro anterior, aconseja la aprobación de uno nuevo que sustituya al actualmente en vigor.

En su virtud, dispongo:

Primero.—Se aprueba el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, que se inserta como anexo a esta Orden.

Segundo.—Se faculta al Director general de Telecomunicaciones para efectuar las correcciones que resulten necesarias en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias si los valores que en él se reflejan sufren alguna alteración como consecuencia de tratados o acuerdos internacionales de los que sea parte del Estado español.

Tercero.—Se autoriza al Director general de Telecomunicaciones para que dicte cuantas instrucciones sean necesarias para la aplicación del Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias.

Cuarto.—El Director general de Telecomunicaciones podrá autorizar usos de carácter temporal o experimental diferentes de los señalados en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, que no causen perturbaciones en estaciones radioeléctricas legalmente autorizadas y que funcionen de acuerdo con el mismo.

Quinto.—Quedan derogadas la Orden del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones de 29 de diciembre de 1989, por la que se aprueba el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, y las Órdenes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes de 11 de junio de 1991, por la que se modifica el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, de 18 de mayo de 1992, por la que se salvan las omisiones y errores padecidos en la Orden anterior, y de 18 de junio de 1993, por la que se modifica el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF).

Sexto.—Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 29 de julio de 1996.

ARIAS-SALGADO MONTALVO

Ilmos. Sres. Secretario general de Comunicaciones y Director general de Telecomunicaciones.

En suplemento aparte se publican los anexos correspondientes